

Editorial

Deuda social del Estado mexicano y crisis de la universidad pública

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS

El Estado mexicano, sumergido en la ideología neoliberal, al abandonar su obligación de financiar con suficiencia la educación pública, ha contraído una fuerte deuda social, que para el caso de la educación superior ha propiciado la inducción de la crisis en las universidades públicas estatales. Esto significa un retroceso cultural histórico debido a la exclusión social que posterga la posibilidad de impulsar el desarrollo humano generalizado, entendido como la formación de capacidades científicas y humanísticas, críticas y creativas.

Con la implementación de los programas de austeridad y ajuste en el gasto social durante las últimas cinco administraciones presidenciales, y el privilegio al pago de servicios de la deuda externa junto a la contención del déficit fiscal, además de la corrupción institucional y la política de mercantilización de la educación, se ha observado una tendencia decreciente del financiamiento del conjunto de las universidades públicas, sobre todo de las instituciones de los estados de la República con mayores desigualdades sociales. El saldo es contrastante: aunado a que la tasa bruta de financiamiento de la educación superior es de sólo 0.4% del producto interno bruto (PIB) y que el gasto por estudiante es de los más bajos (300 dólares por alumno) a nivel internacional, en el ámbito nacional el patrón de distribución es desigual, con una alta concentración en 10 universidades públicas ubicadas en las ciudades metropolitanas y un grupo de más de 20 universidades estatales dispersas en el amplio territorio mexicano que padecen precariedad y crisis recurrentes.

Las administraciones tecnocráticas están ávidas de manipular los indicadores sin hacer cambios estructurales, pero ejercen presión sobre los trabajadores universitarios para «hacer más con menos». Pese a los bajos niveles de financiamiento, que no han logrado la promesa de alcanzar el 1% del PIB, se presiona a las universidades públicas para que incrementen la matrícula, para mejorar los indicadores de cobertura, pero sólo se generan condiciones más degradadas para la admisión de estudiantes, pues no se cuentan con recursos suficientes para infraestructura, mantenimiento y prestación de servicios educativos.

En el concierto internacional, México presenta una muy baja cobertura en educación superior entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en América Latina. Apenas 3 de cada 10 jóvenes de 18 a 22 años pueden acudir a una institución de educación superior, además de que la matrícula está altamente concentrada en las grandes ciudades, mientras que en algunos estados sólo 1 de cada 5 o menos tiene acceso a esos espacios educativos.

Como tendencia, el país enfrenta el proceso más acusado de privatización de la educación superior en América Latina, debido a la contracción del financiamiento a las instituciones públicas y su consecuente decrecimiento relativo con el impulso de medidas tendientes a la mercantilización de la educación pública y, en el otro frente, a la proliferación de instituciones privadas. Una dinámica que se suma a la política de desmantelamiento generalizado de las instituciones pública y el despojo de bienes nacionales y comunales.

El papel de movilidad y cohesión social que otrora representaba la universidad pública se ha minado. Los jóvenes en edad de estudiar una carrera universitaria enfrentan mayores barreras de ingreso, además de padecer incrementos en los costos de manutención y la desmoralización ante la desvalorización sociolaboral de títulos, carreras y programas educativos. Por tal razón, se diluye la expectativa de acceso a los posgrados y la tentativa de una formación más especializada que pudiera inscribirse en el desarrollo científico, tecnológico, cultural y democrático del país.

Las desigualdades sociales se expresan nítidamente en el desarrollo desigual del espectro universitario, público y privado. La universidad pública se ha tornado un espacio cada vez más selectivo, que privilegia el ingreso, egreso y titulación de los sectores de medianos y altos ingresos, en detrimento de las clases populares, los hijos de los trabajadores, campesinos, indígenas y migrantes que componen a la mayoría de jóvenes del país, los cuales disponen con cada vez menos posibilidades de desarrollo humano y se convierten en una presa fácil de los mercados laborales altamente precarizados, la migración forzada y las actividades ilícitas. La brecha educativa entre los sectores de altos y bajos ingresos se ha expandido 56.6% en las últimas dos décadas para los jóvenes de entre 20 y 24 años: mientras que 78.3% del quintil más rico puede completar la educación superior, apenas 21.7% del quintil más pobre también puede hacerlo. El llamado «bono demográfico», la abundancia de jóvenes, el recurso más valioso con que cuenta el país, se está perdiendo aceleradamente, y se descarrila del imaginario derrotero del progreso para volcarse hacia el submundo del trabajo precario, la migración o la criminalidad, sin pasar por las aulas universitarias.

La pérdida acelerada de egresados universitarios que se cuentan entre el personal altamente calificado por migración nutre la llamada «fuga de cerebros». En ese tráfago se incluye a investigadores, científicos, intelectuales, académicos, profesionistas y artistas que no encuentran condiciones suficientes para desarrollar sus capacidades y conforman una peculiar forma de migración forzada que busca mejores condiciones ocupacionales, sobre todo en Estados Unidos, donde sin embargo la discriminación y estratificación laboral los puede colocar en puestos degradados, inseguros y mal pagados. En todo caso, esta migración de trabajadores calificados significa la pérdida inapreciable de una masa crítica que, en otras circunstancias económico-políticas, pudiera contribuir al desarrollo del país.

Como en todo el mercado laboral, la política de precarización laboral se ha introducido subrepticamente en la universidad pública como un dispositivo que pretende dismantelar conquistas sindicales y mermar la autonomía universitaria. La política de austeridad redundante en el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores universitarios y genera mecanismos de diferenciación al interior de las instituciones educativas, que a la postre propician un clima de desmoralización, individualismo y deterioro de la vida institucional. La gran mayoría del personal académico tiene asignadas cargas ocupacionales temporales, semestrales o anuales y sólo entre 10 y 16% tiene puestos de tiempo completo y permanencia en las universidades públicas del país.

El panorama actual de la universidad pública se ha recrudecido con la situación de insolvencia financiera que enfrentan al menos siete instituciones (las universidades autónomas de Morelos, Zacatecas, Estado de México, Nayarit, Juárez de Tabasco, Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana), además con el riesgo inminente de que caigan en la misma situación otras 17 universidades. Esta situación repercute en problemas sociales locales y regionales que rebasan los confines de las instituciones educativas y se trasminan al resto de la sociedad generando una conflictividad social más acusada.

México experimenta una gran crisis multidimensional que se agrava con la violencia irrefrenable, el aumento de la pobreza, la migración forzada y la violación de los derechos humanos. En este contexto, la universidad pública está llamada a cumplir una misión social estratégica para impulsar un desarrollo humano incluyente y la consolidación de la vida democrática.

La nueva alternancia en el gobierno federal, luego de la derrota de los partidos que se venían sucediendo la hegemonía neoliberal y el consecuente triunfo de Andrés Manuel López Obrador, abre una expectativa para reconstruir la relación entre el Estado y la sociedad, en particular en el ámbito educativo y universitario. Es un proceso en ciernes, sujeto a múltiples tensiones y contradicciones, pero su derrotero no presagia el arribo a buen puerto sin la participación activa de las comunidades universitarias, puesto que, como lo demuestra la historia, no puede delegarse en las burocracias educativas y hacendarias el futuro del proyecto educativo, y menos aún si se vincula con la enorme proyección de una transformación social sustantiva. 🐦